



República de Chile



Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

**PLAN DE ACCION
DEL PROGRAMA DE PAIS
2015-2018**

INDICE DE CONTENIDOS

El marco -----	3
Parte 1. Bases de la relación -----	4
Parte 2. Justificación del Programa -----	5
Parte 3. Prioridades y contrapartes del Programa -----	7
Parte 4. Gestión del Programa y de los riesgos -----	9
Parte 5. Seguimiento y Evaluación -----	10
Parte 6. Alianzas estratégicas -----	12
Parte 7. Compromisos del PNUD y del Gobierno -----	13
Parte 8. Otras disposiciones -----	17
 ANEXO I. Marco de resultados y recursos -----	 18
ANEXO II. Plan de evaluación -----	24



El marco

El Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han acordado mutuamente el contenido del presente documento y sus responsabilidades en la implementación del Programa País.

Con el fin de reforzar su acuerdo mutuo y su cooperación en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en la aplicación de las Convenciones de las Naciones Unidas y las resoluciones de las Cumbres con las que el Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han formalizado su compromiso.

Sobre la base de la experiencia adquirida y los avances logrados durante la ejecución del Programa País anterior 2011 - 2014, al ingresar ahora a un nuevo período de cooperación 2015 – 2018, el Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo declaran que dichas responsabilidades serán cumplidas en plena observancia de un espíritu de estrecha colaboración y han acordado lo siguiente:



Parte 1. Bases de la relación

1.1 CONSIDERANDO QUE el Gobierno de la República de Chile (en adelante mencionado como “Gobierno”) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, establecido conforme al artículo 22 de la Carta de las Naciones Unidas por la resolución 2029 de la Asamblea General, de 22 de noviembre 1965, fusionando el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y el Fondo Especial de las Naciones Unidas (en adelante mencionado como “PNUD”) han celebrado el “Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica entre el Gobierno de Chile y las Naciones Unidas”, suscrito el 15 de enero 1957, y el “Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre Asistencia del Fondo Especial”, suscrito el 22 de enero de 1960 y enmendado el 18 de agosto de 1970, (en adelante mencionado como los “Acuerdos Básicos”). Sobre la base del artículo I, párrafos 2 y 3 respectivamente de los Acuerdos Básicos precitados, se pondrá a disposición del Gobierno la asistencia del PNUD, que será brindada y recibida de conformidad con las resoluciones y decisiones pertinentes y aplicables de los órganos competentes de PNUD y sujeto a que el PNUD cuente con los fondos disponibles que sean necesarios. En particular, conforme a su decisión 2005/1, del 18 de enero de 2005, la Junta Ejecutiva del PNUD aprobó el nuevo Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada y también nuevas definiciones de “ejecución” e “implementación” que le permitan al PNUD realizar plenamente los nuevos Procedimientos Comunes de Programación por Países que resultan de la iniciativa de simplificación y armonización del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A la luz de esta decisión, el presente Plan de Acción del Programa País (CPAP) junto con los Documentos de Proyecto/Planes de Trabajo Anuales, suscritos conforme al primero, constituyen el marco de programación conjunta para el período. A tal fin, cada Documento de Proyecto/Plan de Trabajo Anual se incorporará al Plan de Acción del Programa País como formando parte de él.



Parte 2. Justificación del Programa

2.1 Chile es un país de ingreso medio, con una tasa de crecimiento medio anual del PIB de 5,5% en los últimos 25 años, miembro de la OCDE desde 2009, y con un índice de pobreza relativamente bajo (14,4% en 2011¹), muy por debajo del promedio de América Latina (27.9%)². El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0,819 (2012), posicionando a Chile en el primer lugar de América Latina; sin embargo, el coeficiente de Gini se sitúa en 0,52 (2011), muy por encima del promedio de la OCDE³ (0.31).

2.2 Después de 24 años de democracia, Chile exhibe un alto grado de eficacia y estabilidad gubernamental: en 2012, Chile se colocó a la cabeza en el Índice de Eficacia Gubernamental en América Latina⁴. Sin embargo, una mirada de conjunto al funcionamiento democrático y de sus instituciones arroja avances dispares y desafíos. Entre 1990 y 2013, la participación electoral en Chile ha disminuido en un 35%, especialmente de jóvenes: sólo el 28% de los encuestados en 2012 de entre 18 y 24 años declaró haber votado en las elecciones municipales ese año⁵. Además, hay un déficit de representación de mujeres, sólo el 15.8% del Congreso Nacional está integrado por mujeres, y de algunos grupos como los jóvenes (el 15% de los parlamentarios tiene entre 21 y 35 años versus el 33,3% que tiene 55 o más⁶) y los indígenas (ningún parlamentario se reconoce como representante de algún pueblo originario⁷). Existen asimismo escasos espacios y mecanismos de participación formales de la ciudadanía en la esfera público-estatal y una baja satisfacción con el funcionamiento de la democracia (59% dice estar poco o nada satisfecho con la democracia⁸). Las causas de esta situación son múltiples y complejas e interactúan conjuntamente. Por un lado, el sistema electoral genera una sub-representación de ciertos sectores (desde 1990 a la fecha las dos principales coaliciones han obtenido en promedio el 97% de los escaños de manera estable a pesar de una disminución en los votos obtenidos en un 35%⁹); además, los partidos han ido perdiendo su conexión con la ciudadanía debilitando su rol de representación. Los marcos regulatorios insuficientes en materia de probidad e integridad de la función pública, afectan el funcionamiento de instituciones como el Congreso, el que, junto a los partidos políticos, cuentan con menor nivel de confianza de la ciudadanía¹⁰.

2.3 Por tanto, el escenario de bonanza macroeconómica y estabilidad institucional, en un marco de escasa representación y confianza en el sistema democrático, no ha estado acompañado por un desarrollo humano equitativo y sostenible y por una participación efectiva de la ciudadanía, hecho relevado por los movimientos sociales iniciados en 2011. Las demandas por la reducción de las desigualdades sociales, políticas y en el ejercicio de derechos, económicas, étnicas, de género, territoriales, se sitúan en el eje de los desafíos que enfrenta el país y se materializan en el campo de los ingresos y la riqueza, que a su vez repercuten sobre aspectos básicos para la calidad de vida como la salud, la educación o la posibilidad de disfrutar de un medio ambiente sano. Las desigualdades afectan principalmente a los grupos de más bajos ingresos, incluyendo los hogares con mujeres como jefas de hogar, jóvenes, pueblos indígenas y habitantes de regiones, evidenciando la necesidad de promover políticas que aborden estas desigualdades. El informe de ODM sobre población indígena evidenció las brechas que persisten entre la población indígena y no indígena (en pobreza, 19,2% vs. 14,4%¹¹) y además, la ausencia de información desagregada por etnia¹².

2.4 Por otra parte, el modelo económico actual genera tensiones entre las políticas de conservación y sostenibilidad, y el mantenimiento de los niveles de desarrollo económico. Además, se refleja en niveles de desigualdad en el acceso a bienes y servicios ambientales. La nueva institucionalidad ambiental y energética,

¹ Encuesta CASEN 2011

² CEPAL, Panorama Social América Latina 2013

³ Factbook OCDE, 2013

⁴ Banco Mundial, 2012

⁵ Encuesta Auditoría de la Democracia, PNUD, 2012

⁶ Unión Inter-Parlamentaria (IPU)

⁷ <http://www.camara.cl> y <http://www.senado.cl>

⁸ Latinobarómetro, 2013

⁹ Auditoría a la Democracia, PNUD 2014

¹⁰ Encuesta Auditoría a la democracia, PNUD 2012

¹¹ Encuesta CASEN 2011

¹² Medición de los ODM en población indígena, Naciones Unidas 2012



creada en 2010, con los ministerios de Medio Ambiente y Energía, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y otros servicios, ha elevado la jerarquía de los temas ambientales e incrementado la coordinación intersectorial. Por ejemplo, el proyecto de ley para la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la propuesta de medidas concretas para avanzar hacia una política energética¹³ que incluye, entre otros, aumentar la participación de las energías renovables no convencionales en la generación eléctrica para llegar al 20% de participación de energías limpias en la matriz energética para 2025 (Ley 20.698); fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso energético con una meta de ahorro de 20% al año 2025 y desarrollar al año 2015 una Política Energética de largo plazo validada por la sociedad chilena. Sin embargo, persisten retos respecto del 62% del territorio de Chile que está afectado por la desertificación, y que se traduce en que 1,700,000 personas¹⁴, principalmente del ámbito rural, sufren de mayores niveles de pobreza y migración. Asimismo, existen 1,400,000 ha. susceptibles de ser reforestadas, lo cual representa una oportunidad para acciones de emprendimiento local, económico y sostenible¹⁵. Actualmente se encuentra en revisión la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que había identificado más de 300 sitios prioritarios para la conservación, para su adecuación al nuevo Plan Estratégico de Biodiversidad (2011-2020)¹⁶ y las Metas para la Diversidad Ecológica de Aichi.

2.5 A las amenazas de origen natural que afectan a Chile (terremotos, maremotos y volcanes), se agrega un conjunto de condiciones de riesgo relacionadas con debilidades institucionales de respuesta y planificación. La gravedad del terremoto de 2010 desencadenó esfuerzos adicionales para abordar la gestión del riesgo de manera integral, que apunta a la consolidación y fortalecimiento del marco institucional actual para avanzar hacia una mayor coordinación de todos los actores involucrados en la reducción de riesgos en línea con las directrices del Marco de Acción de Hyogo (2005-2015).

2.6 Chile presenta en la actualidad un mayor desarrollo relativo frente a otros países de la región. Su buen desempeño económico en las últimas décadas, la modernización de varios servicios y sectores productivos, así como el reconocimiento internacional, han dispuesto un escenario propicio para traspasar capacidades y conocimiento sobre políticas públicas exitosas, como el programa de empleo a jóvenes o el programa de calidad en educación preescolar ejecutado en Haití. Este hecho ha quedado de manifiesto en la gran cantidad de iniciativas de cooperación triangular que se llevan a cabo, que le han permitido consolidar su posicionamiento como cooperante en la región con una política exterior más sólida. Lo anterior además se potencia con la pertenencia de Chile a la OCDE y las primeras proyecciones para consolidarse como un donante emergente, mientras conserva también su rol de receptor, beneficiándose así en otros ámbitos en los que presenta un mayor rezago.

2.7 Entre los principales logros alcanzados en el marco del Programa anterior, destacan los avances en la introducción de nuevos enfoques para analizar, evaluar e informar sobre temas de pobreza a través de variables que complementan lo estrictamente económico o basado en el ingreso, como la perspectiva multidimensional o el concepto de bienestar subjetivo, que contribuyen al rediseño de políticas más eficaces para beneficiar a los grupos más desfavorecidos. Los Informes Nacionales de Desarrollo Humano, Género y Bienestar Subjetivo en este período, han contribuido al análisis y debate en temas clave aportando nuevas miradas para abordar los retos presentes. Por otra parte, PNUD, en su rol como facilitador de diálogo y constructor de consensos, publicó en 2014 el Informe de Auditoría de la Democracia, fruto de la articulación de un grupo de centros de pensamiento de diversas tendencias políticas, que ha generado las últimas reformas del sistema político y sienta las bases para las reformas pendientes. Las evaluaciones de efecto realizadas en 2013¹⁷ han evidenciado la necesidad de profundizar en los marcos de resultados, con el fin de mejorar el seguimiento de las iniciativas y la toma de decisiones basadas en la evidencia. Por otra parte, la iniciativa conjunta con la UE, que aborda los problemas derivados de la desertificación, ha replicado metodologías y sistemas aplicados por el Programa de Pequeños Subsidios en el ciclo anterior, probando la eficacia de las acciones que parten de las comunidades como actores y destinatarios de dichas acciones. En este sentido, la participación de los beneficiarios en todo el ciclo de proyecto, desde la definición del problema hasta la administración de recursos y la recogida y transmisión de lecciones aprendidas, han contribuido al

¹³ Agenda de Energía 2014, Ministerio de Energía

¹⁴ Convención de NNUU sobre la Lucha contra la Desertificación

¹⁵ Consideraciones para una nueva ley de fomento forestal. Colegio de Ingenieros Forestales CIFAC, 2010

¹⁶ Convención de Diversidad Biológica

¹⁷ Gobernabilidad, Equidad y Medio Ambiente 2013



empoderamiento de las comunidades. Por otro lado, un correcto equilibrio de poder entre hombres y mujeres, ayuda a involucrar a éstas en la igualdad de condiciones respecto de los beneficios de dichos proyectos¹⁸.

Parte 3. Prioridades y contrapartes del Programa

3.1 Desarrollo inclusivo y sostenible. Abordar la desigualdad desde sus distintas dimensiones constituye el mayor reto en Chile, como país de renta media. Las políticas públicas deben apuntar a corregir las brechas de desigualdad que afectan a grupos vulnerables, incluyendo mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, en ámbitos tales como los ingresos, la educación o el trabajo. Además, la desigualdad que se evidencia a nivel territorial entre las regiones, tanto en aspectos socioeconómicos como en el acceso a recursos naturales o en la posibilidad de disfrutar de un medio ambiente adecuado, requiere de medidas que entreguen mayores competencias y capacidades a las regiones, municipios y ciudadanos, a efectos de afrontar sus propios desafíos de desarrollo. La segregación urbana es otra manifestación de la desigualdad en el acceso a servicios y a una calidad de vida adecuada al interior de las ciudades. En este sentido, se apoyará el diseño e implementación de políticas públicas resilientes que mejoren los niveles de protección social, la reforma del sistema de focalización, la medición de variables socioeconómicas, la formación de competencias laborales para mejorar el acceso a oportunidades de empleo, la reforma educativa, la política de suelos y la transferencia de competencias y capacidades a las regiones. Además, los avances en el desarrollo requieren de políticas públicas resilientes a las recesiones económicas o los riesgos ambientales. La alianza con los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Educación y Vivienda y Urbanismo ha generado una dinámica de trabajo conjunto para el fortalecimiento e instalación de capacidades al interior de estas instituciones, y la participación de PNUD en el debate público en torno a la desigualdad en sus distintos ámbitos, incluida la desigualdad de género. Además, PNUD ha iniciado una agenda propia de investigación cuya finalidad es generar antecedentes e indicadores para una estrategia efectiva de de-construcción de la desigualdad, ofreciendo una mirada multidimensional y actualizada. Además, los informes nacionales de Desarrollo Humano incorporarán la dimensión territorial y local con el fin de contribuir a generar conocimiento sobre brechas de desigualdad.

Asimismo, se apoyará el fortalecimiento de capacidades para mejorar la gestión de los recursos naturales y energéticos y a acercarla a las regiones, municipios y ciudadanos, en relación a la promoción de una economía baja en emisiones de dióxido de carbono, el diseño e implementación de acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático, la lucha contra la desertificación con la participación activa de municipios y comunidades, y la definición de mecanismos financieros y legales adecuados para la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas. En este contexto, se potenciarán las alianzas con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Energía, así como con gobiernos regionales y locales, para la definición de políticas y planes de acción, dando entrada a otras instituciones clave para asegurar la sostenibilidad ambiental como el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, la consolidación de las alianzas con la Unión Europea (UE), en la lucha contra la desertificación, y con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en conservación de la biodiversidad, potenciará las acciones en el nivel comunitario a través del fomento de actividades productivas sostenibles promovidas desde las comunidades. Dichas actividades deben ser demostrativas y replicables y generar beneficios ambientales desde los propios beneficiarios, así como el desarrollo de capacidades de gobiernos regionales y locales para la planificación, diseño y gestión de políticas públicas con un enfoque participativo, promoviendo además alianzas público-privadas para involucrar al sector privado en la mejora de la calidad de vida de las comunidades en las que desarrollan sus actividades productivas.

3.2 Democracia inclusiva y participativa. El principal reto para fortalecer la democracia es mejorar el funcionamiento de las instituciones y que se produzca un ajuste entre éstas y las demandas y expectativas ciudadanas. Lo anterior debe hacerse asegurando la participación de la ciudadanía, ya que importa tanto el proceso como los resultados. La consolidación de un Estado moderno y eficiente requiere de recursos administrativos, financieros y humanos adecuados a nivel central, regional y local, con procesos de gestión transparentes que contemplen mecanismos de participación y contribuyan a garantizar la probidad y

¹⁸ Evaluación proyecto desertificación, UE, 2012



transparencia en la gestión pública. A partir de la alianza con actores académicos, sociales y políticos, se continuará con la labor de generación de conocimientos y abogacía para apoyar los cambios al sistema político, incluyendo el sistema electoral, el financiamiento de partidos o la nueva constitución, necesarios para el fortalecimiento de la democracia, desde un enfoque de derechos y participación, aportando insumos para el debate y la toma de decisiones. Por otra parte, la alianza con el Congreso Nacional contribuirá a fortalecer la ética y transparencia a través de la generación de capacidades en parlamentarios(as), asesores(as) y funcionarios(as) del Congreso, promoviendo la participación de la sociedad civil en el proceso legislativo a través de la identificación y puesta en marcha de mecanismos que permitan mejorar la labor de representación y rendición de cuentas. Se profundizará el trabajo en conjunto con el Consejo para la Transparencia con el fin de generar conocimiento respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el reconocimiento de los desafíos y limitantes para la efectiva implementación de la ley. Continuará el apoyo al desarrollo de iniciativas de fortalecimiento de capacidades de mujeres líderes con el fin de incrementar su participación política y de medidas para abordar la violencia de género a partir de la alianza generada con el Servicio Nacional de la Mujer y distintas organizaciones de la sociedad civil. Además, el apoyo en la temática de pueblos indígenas se enfocará en la evaluación y apoyo al rediseño de políticas destinadas a disminuir las brechas entre población indígena y no indígena, con participación de los Pueblos Originarios, y la incorporación de indicadores y enfoques con pertinencia étnica destinados a incrementar la eficiencia y eficacia de dichas políticas. En el ámbito local, el foco estará en el desarrollo de metodologías para promover la participación y el diálogo social en los procesos de descentralización y la puesta en marcha de programas piloto de descentralización que puedan replicarse posteriormente con un método evaluado y validado por los actores participantes. Esta iniciativa requerirá el apoyo multidisciplinar de todos los actores públicos y privados vinculados al territorio, con la posibilidad de generar sinergias y lecciones en un reto clave para la región latinoamericana.

3.3 Riesgo de desastres y resiliencia. En ese ámbito, se apoyará la adopción, en forma transversal, del enfoque de Reducción del Riesgo que, partiendo de la planificación del territorio, atraviese la institucionalidad e inversión públicas. Las acciones para abordar este reto incluyen el desarrollo de capacidades de planificación, tanto a nivel central como sub-nacional, la elaboración de propuestas, instrumentos y metodologías de trabajo con enfoque de género, y la generación de conocimiento y difusión de experiencias exitosas. La estructura de alianzas desde el Sistema de Naciones Unidas, con ONEMI, sociedad civil, organizaciones de ayuda humanitaria y gobiernos locales y regionales, potenciará los efectos de las acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para enfrentar las crisis de una manera coordinada y efectiva. La gestión de riesgos implica aquellos derivados de desastres, pero también los ambientales y originados por el cambio climático, al introducir una visión más comprehensiva en la fase de planificación para asegurar procesos de desarrollo integrales y mayor resiliencia en caso de desastres. Esta línea complementará el trabajo desarrollado con gobiernos locales, actores estratégicos en la gestión de riesgos y el desarrollo local, para la definición de estrategias de desarrollo regional que amplíen las capacidades de desarrollo desde las regiones para asegurar la reducción de las vulnerabilidades ambientales y socioeconómicas de los grupos más expuestos al riesgo. Estos esfuerzos contribuirán a reducir las brechas de desigualdad territorial que aún persisten en los distintos ámbitos, y a consolidar los efectos de las intervenciones, apoyando en la generación comunidades más capaces y resilientes.

3.4 Cooperación sur-sur. El potencial de la cooperación sur-sur como medio para generar sinergias a nivel regional, y también hacia otras regiones, facilitando intercambios de buenas prácticas entre países, genera un espacio donde Chile puede entregar y recibir capacidades y conocimientos en el desarrollo de políticas públicas. PNUD, desde su rol de facilitador, apoya el fortalecimiento de capacidades de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, y junto a ella, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la consolidación del Fondo Chile Contra el Hambre y la Pobreza, y en paralelo se continuará avanzando en el incremento de la capacidad de gestión institucional de la cooperación, la consolidación de una estrategia nacional, así como en el establecimiento de alianzas con otros actores de la cooperación, como ONG y universidades, y en el desarrollo de plataformas y productos de conocimiento que contribuyan a la replicabilidad de experiencias exitosas, incorporando el enfoque de igualdad de género. Finalmente, se explorarán nuevas vías para promover la cooperación desde el Sistema de Naciones Unidas y desde otras instancias institucionales, como los gobiernos regionales y locales, con el fin de abrir espacios que contribuyan al desarrollo y a cerrar brechas de desigualdad en las regiones.



Parte 4. Gestión del Programa y de los riesgos

4.1 El Programa se ejecutará bajo la coordinación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, como contraparte técnica, y del Ministerio de Relaciones Exteriores como contraparte oficial en representación del Gobierno de Chile. Se constituirá una Junta del Programa que integrará a los mencionados ministerios y que convocará a otras contrapartes clave en la implementación para apoyar en el seguimiento y asegurar la eficacia y eficiencia del Programa. Esta Junta se reunirá trimestralmente para revisar los avances en la implementación del Programa, y al menos una vez al año para definir ajustes a partir de los resultados obtenidos e identificar sinergias, lecciones y aprendizajes para el futuro.

4.2 La modalidad de ejecución será la implementación nacional, sin embargo, podrá optarse por la implementación directa para asegurar una respuesta efectiva cuando las circunstancias o temáticas así lo ameriten. Los organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organismos intergubernamentales internacionales y organismos de Naciones Unidas, incluido PNUD, podrán implementar actividades del Programa.

4.3 Para cada iniciativa se designará a un Director Nacional del organismo correspondiente que será el responsable directo de la participación del gobierno en el Documento de Proyecto en el que colabore PNUD. Estos Documentos de Proyecto describen los resultados esperados que deben alcanzarse respecto del empleo de recursos y constituirá el acuerdo básico entre PNUD, el Organismo de Coordinación y cada uno de los Asociados en la Implementación. La referencia al Asociado en la Implementación significará "Organismo de Ejecución", según los términos señalados en los Acuerdos Básicos suscritos entre el Gobierno de Chile y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y el Fondo Especial de las Naciones Unidas.

4.4 PNUD trabajará estrechamente con los socios en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de este Plan de Acción. El Plan se basa en los principios de la reforma de Naciones Unidas, especialmente en la simplificación y armonización, actuando según los instrumentos comunes y armonizados de programación, tales como la matriz de resultados del MANUD (Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo), la matriz de seguimiento y evaluación; el marco de recursos del Plan de Acción y los Documentos de Proyecto/Planes de Trabajo Anuales. En la medida de lo posible, el PNUD y los Asociados recurrirán a la menor cantidad de documentación que sea necesaria para poner en marcha las iniciativas. En línea con las directrices para la Programación Conjunta del Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas, el alcance de la cooperación inter-agencial se fortalecerá para propiciar nuevas convergencias programáticas y regionales.

4.5 En el caso de proyectos ejecutados bajo la modalidad de implementación nacional, PNUD podrá igualmente actuar en calidad de Parte Responsable en la prestación de servicios de apoyo en la ejecución de las actividades, lo cual quedará especificado en el Documento de Proyecto.

4.6 El sistema de planificación de recursos y ejecución financiera que utilizará el PNUD para sus operaciones se denomina ATLAS. Este sistema contribuye a la eficiente implementación y entrega de los resultados pactados en el Plan de Acción y en los planes de trabajo anuales así como a la gestión financiera y programática de proyectos y programas. A partir del mismo se obtienen los informes financieros que PNUD utiliza para rendir los fondos que recibe para la implementación de iniciativas de acuerdo a sus reglas y regulaciones financieras.

4.7 Todas las transferencias de fondos se realizarán previa suscripción de los Documentos de Proyecto/Planes de Trabajo Anuales acordados entre los Asociados en la Implementación y el PNUD, constituyendo el Plan de Acción que se suscribe el marco dentro del cual se realizarán.

4.8 Las transferencias de fondos para las actividades detalladas en el Documento de Proyecto/Plan de Trabajo Anual podrán realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:

- Fondo transferido a la cuenta bancaria correspondiente del implementador



- Pago directo a los proveedores o terceras partes de las obligaciones contraídas por los Asociados en la Implementación. Dicho pago debe ser autorizado y firmado por la autoridad competente designada por el Asociado en la Implementación.
- Pagos directos a proveedores o terceras partes de las obligaciones contraídas por Organismos de Naciones Unidas a favor de las actividades acordadas con los Asociados en la Implementación.

4.9 Los esfuerzos para la movilización de recursos serán intensificados para apoyar la relación entre recursos y resultados y la sostenibilidad del Programa. Se acometerá la movilización de otros recursos en forma de participación en la financiación de los gastos, fondos fiduciarios o contribuciones gubernamentales de contraparte en efectivo, para garantizar la financiación del Plan.

4.10 Las contribuciones que reciba el PNUD de cualquier fuente estarán sujetas exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría establecidos en las reglas, regulaciones y directivas financieras del PNUD.

4.11 El Programa está alineado con las prioridades nacionales así como con las áreas de trabajo identificadas en el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) y en el Plan Estratégico del PNUD. Este documento es el medio principal para la rendición de cuentas a la Junta Ejecutiva en relación a alineación de resultados y recursos asignados al programa a nivel nacional. La responsabilidad de directores a nivel nacional, regional y global está definida en el manual de procedimientos y operaciones y en los marcos de control interno.

4.12 Además, en su implementación seguirá los principios de la gestión basada en resultados con el fin de incrementar progresivamente los niveles de eficacia del Programa, e integrando progresivamente y de manera sistemática los parámetros del Plan Estratégico en el diseño de proyectos y programas, con especial énfasis en la multi-dimensionalidad, la cooperación sur-sur y la focalización de las acciones e iniciativas hacia los distintos grupos de beneficiarios. Durante este ciclo, se fortalecerán las capacidades de la Oficina de PNUD en Chile para el diseño de indicadores y la recopilación y análisis de datos, con el fin de disponer de más y mejor información para un adecuado seguimiento y toma de decisiones a partir de la evidencia. Todo ello implica la adopción de nuevas dinámicas de trabajo y para ello se constituirá un grupo de trabajo interno, que se extenderá a las contrapartes.

4.13 Entre los riesgos que podrían afectar la adecuada implementación de las iniciativas deberá tenerse en cuenta las posibles dificultades para la movilización de recursos en un escenario de restricción a nivel internacional y considerando la clasificación de Chile como país de ingreso medio. En este sentido, se rediseñará la estrategia de movilización de recursos a nivel nacional e internacional, con el fin de alcanzar los niveles de ejecución requeridos para cumplir con los objetivos del Programa. Chile, país con cierto grado de exposición a los riesgos naturales, podría sufrir algún evento que afectara también la ejecución de las actividades previstas al cambiar el foco de las prioridades nacionales ante una situación de desastre. En este caso, el Programa se volcará en el apoyo en la situación de emergencia y en la movilización de recursos a nivel internacional para resolver las crisis y mitigar sus efectos.

Parte 5. Seguimiento y Evaluación

5.1 El seguimiento y evaluación del Programa se realizará a partir de los indicadores, líneas de base y metas definidas en el Plan Estratégico y el MANUD, y en la medida de lo posible los indicadores serán desagregados por género, y otras variables cuando aplique. En la medida de lo posible, los indicadores y metas utilizarán fuentes nacionales de información como el Instituto Nacional de Estadísticas, el Servicio Electoral e informes y documentos producidos por organismos sectoriales y otros socios. PNUD apoyará a las instituciones nacionales en la generación información de base, y establecerá alianzas con otros centros de investigación para mejorar las capacidades de seguimiento y análisis en la implementación de políticas públicas. Cuando corresponda, los proyectos incorporarán entre sus objetivos la generación de información y producción de datos para evidencia y análisis.



5.2 Por otra parte, el seguimiento se complementará con aquél que se realice en el marco del MANUD. Está previsto definir un plan de trabajo anual al que PNUD contribuirá con productos e indicadores específicos, reforzando el seguimiento interno, además de aportar en la búsqueda de sinergias y un esfuerzo más coordinado con las agencias del Sistema en Chile. En la medida de lo posible se fomentará el trabajo conjunto en el diseño, recogida y análisis de datos, y también a efectos del reporte de los logros y avances en el marco del Programa. Por otra parte, se potenciarán las alianzas con otros socios para el diseño y uso de indicadores, incorporando a beneficiarios, contrapartes, centros de pensamiento, academia y organizaciones de la sociedad civil.

5.3 El Plan de Evaluación contempla una selección equilibrada de resultados y proyectos sobre los que se recogerá evidencia de logros y lecciones, con el fin de apoyar la mejora continua en el diseño de acciones con un enfoque basado en resultados, identificando aquellas iniciativas que tengan potencial de replicarse y que posean características innovadoras en cualquiera de sus fases, e integrando a los beneficiarios de las acciones en la evaluación de las mismas, con el fin de recoger su perspectiva y lecciones aprendidas.

5.4 El Gobierno y el PNUD serán responsables de establecer los mecanismos, herramientas y periodicidad de las revisiones de este Plan de Acción para asegurar un adecuado Seguimiento y Evaluación de los resultados con el fin de garantizar un adecuado uso de recursos y la toma de decisiones a partir de la evidencia recogida en los procesos de seguimiento y evaluación. Para ello, la Junta de Programa, definida en el apartado 4.1 de este Plan de Acción, realizará reuniones de seguimiento trimestrales en las que se discutirán los avances de los proyectos y del Programa, con el fin de realizar los ajustes que sea necesario y aportar sugerencias para mejorar la eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad de las actividades que se llevan a cabo. A estas reuniones asistirán los representantes de los ministerios sectoriales involucrados en la implementación de las iniciativas según corresponda y en función de las temáticas a tratar. En estas instancias se entregarán los informes financieros de los proyectos en curso con el fin de incorporar el análisis financiero en el seguimiento de los avances del Programa. En este sentido, y a partir de las lecciones y buenas prácticas identificadas en el ciclo anterior, se continuarán las acciones de fortalecimiento de capacidades de los asociados del Programa en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, incluyendo la definición y análisis de indicadores; la implementación del Plan de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción y los proyectos asociados al mismo; y la identificación y sistematización de aprendizajes y buenas prácticas para ser compartidas a nivel nacional e internacional, incluyendo aquellas que no hayan resultado exitosas, con el fin de contribuir a definir estrategias y programas más eficientes en el futuro. Para asegurar la adecuada implementación de la función de Seguimiento y Evaluación, se destinará un porcentaje de los recursos asignados para la ejecución de cada uno de los resultados, que oscilará entre el 1 y el 3%, para llevar a cabo las tareas de seguimiento, cumplir con el Plan de Evaluación y apoyar en el desarrollo de indicadores y líneas de base, con el fin de mejorar progresivamente el enfoque de resultados.

5.5 Los Asociados en la Implementación contribuirán con informes periódicos sobre el progreso, logros y resultados de los proyectos, incluyendo desafíos, problemas a los que se enfrentaron en la ejecución del proyecto, lecciones aprendidas y uso de recursos según se haya definido en los Documentos de Proyecto/Planes de Trabajo anuales. La presentación de informes se realizará de acuerdo a las normas y procedimientos de PNUD.

5.6 Los Asociados en la Implementación aceptan cooperar con el PNUD en la supervisión de todas las actividades sostenidas por las transferencias de fondos y facilitarán el acceso a registros financieros y al personal responsable de la administración de los fondos proporcionados por PNUD. A tal efecto, los Asociados en la Implementación aceptarán:

- Revisiones in situ periódicas y verificaciones puntuales de sus registros financieros a cargo del PNUD o sus representantes.
- Seguimiento programático de las actividades de acuerdo a los estándares y orientaciones propias de PNUD para las visitas de terreno
- Auditorías especiales o programadas. PNUD establecerá un plan de auditoría anual de acuerdo a los criterios y estándares de la reglamentación financiera de la Organización. Las auditorías serán solicitadas por el PNUD y realizadas por firmas de auditoría privadas.

5.7 Las evaluaciones y auditorías serán realizadas de conformidad con las políticas y procedimientos de PNUD.



Parte 6. Alianzas estratégicas

6.1 El Ministerio Secretaría General de la Presidencia es la contraparte técnica del PNUD para la implementación de este Plan de Acción ya que actúa como Agencia de Coordinación. Por otra parte, el **Ministerio de Relaciones Exteriores**, como contraparte oficial del PNUD, ejerce como Representante del Gobierno de Chile para la ejecución de las actividades derivadas del presente Plan de Acción. Las acciones sectoriales se coordinarán con los ministerios e instituciones competentes y especializadas en cada caso. Asimismo, parte de su ejecución se realizará de forma articulada con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile en el marco del MANUD.

6.2 Instituciones del Estado: El PNUD se vinculará fundamentalmente con los ministerios y servicios, autoridades nacionales, regionales y locales, con el poder legislativo y judicial así como con organismos autónomos del Estado para impulsar estrategias tendentes a fortalecer/developar capacidades de diseño, implementación y coordinación de políticas públicas a nivel nacional, regional y local. PNUD brindará conocimientos procedentes de la sistematización de experiencias nacionales e internacionales y de su propia capacidad técnica instalada, facilitará operativamente la ejecución de proyectos y ofrecerá instancias de evaluación de políticas públicas. En particular a nivel regional y local, PNUD continuará en sus esfuerzos por fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, así como la consistencia y complementariedad entre las políticas nacionales y locales.

El trabajo de coordinación con instituciones público-estatales se basará en el principio de co-financiamiento, para potenciar los recursos y asegurar la sostenibilidad de los proyectos e iniciativas, al mismo tiempo que se buscará expandir la red de alianzas y poner temas en la agenda para incentivar la formulación de políticas públicas.

6.3 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): En el marco del CPAP se establecerán alianzas con actores de la sociedad civil que compartan los objetivos de desarrollo que orientan este Plan de Acción, en el marco del pluralismo que caracteriza el accionar de las Naciones Unidas, como fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones civiles y ciudadanas, gremios y sindicatos de trabajadores y profesionales, asociaciones de pequeños productores y empresariales. PNUD trabajará con estas organizaciones a diferentes niveles en cada una de las áreas temáticas definidas en este Plan, a saber: a) como asociados en la implementación, participando en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de programas, b) como proveedores de servicios a través de subcontratos, c) como especialistas a ser consultados e integrantes de consejos consultivos en diversas materias.

6.4 Sector privado: PNUD promoverá alianzas estratégicas con el sector privado aportando el aprendizaje de experiencias internacionales, articulando y compatibilizando los objetivos de mayor productividad con los de desarrollo humano y la equidad. Los asociados en el sector privado serán fundamentalmente asociaciones gremiales empresariales, centros de desarrollo empresarial, empresas y entidades de la denominada Economía Social y otras interesadas en promover la responsabilidad social empresarial y el desarrollo. Los aportes del sector privado se relacionan principalmente con la co-gestión público/privada de programas de desarrollo, promoviendo los principios del Pacto Global de Naciones Unidas (entre los que se cuenta el apoyo, respeto y protección de los derechos humanos, la abolición de toda forma de discriminación en el empleo y la erradicación del trabajo infantil, la responsabilidad ambiental y las prácticas anticorrupción); colaborando en la movilización de recursos para financiar programas y proyectos y en las discusiones sobre políticas públicas, así como participando en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de alianzas público-privadas.

6.5 Sistema de Naciones Unidas: En el contexto de la reforma de Naciones Unidas, PNUD tiene a su cargo la función de coordinación estratégica del Sistema en los países a través de la Oficina del Coordinador Residente (OCR). Para cumplir con este mandato, la OCR promueve y facilita una planificación de la cooperación para el desarrollo eficiente y efectiva alineada con las prioridades nacionales de todas las agencias del Sistema con representación en el país. En 2014 concluyó la etapa de elaboración del Marco de



Asistencia de Naciones Unidas al Desarrollo (MANUD) en Chile para el período 2015-2018. Este Marco establece un conjunto de resultados de desarrollo conjuntos para estimular la coordinación entre las diversas agencias. El presente CPAP ha utilizado este Marco como base para definir resultados y establecer metas para dicho período. Junto con el Gobierno se buscará establecer alianzas estratégicas, evitar la duplicación de tareas y potenciar líneas de trabajo con las agencias del Sistema de las Naciones Unidas que trabajan en los temas priorizados. Dicha colaboración se llevará a cabo mediante la implementación de proyectos conjuntos, contribución en especie o contribución directa de recursos financieros; la movilización de recursos financieros; la participación en los marcos de programación conjunta y planes de trabajo conjuntos; la colaboración en el diálogo sobre políticas; y la participación en los grupos internacionales e interagenciales de discusión y los grupos temáticos.

6.6 Organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo: Los mecanismos de cooperación para el desarrollo se traducen en acciones programáticas auspiciadas por instituciones y fondos multilaterales y bilaterales. En Chile existen organismos multilaterales y bilaterales interesados en contribuir al desarrollo a través del trabajo del PNUD en colaboración con el Gobierno. De la misma forma existen fondos fiduciarios que, en particular en materia ambiental, son decisivos para el acompañamiento de muchas iniciativas en el país para la protección de la biodiversidad, el manejo sostenible de las tierras, el cambio climático, la preservación de las aguas compartidas y los contaminantes persistentes. Es el caso del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM – GEF, por sus siglas en inglés), del que PNUD actúa como agencia de implementación. También existen otros fondos de menor envergadura en las áreas de Gobernabilidad y Equidad que financian proyectos de desarrollo. Este modelo de donación de fondos es crítico para el financiamiento de muchas iniciativas que no cuentan con recursos locales suficientes y constituyen una fuente de financiamiento que se espera continúe/complemente en el corto y mediano plazo como parte de las acciones comprendidas en este Plan de Acción. Los organismos internacionales contribuyen además proporcionando asesoría técnica, estimulando el intercambio de buenas prácticas entre países, colaborando en iniciativas de posicionamiento, promoción y seguimiento de temas relevantes para el desarrollo y contribuyendo a discusiones sobre política; así como también en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos orientados hacia la consecución de los resultados del Plan de Acción.

Parte 7. Compromisos del PNUD y del Gobierno

7.1 Recursos para la implementación del Plan de Acción del Programa País 2015-2018. Durante este ciclo, se prevén los siguientes aportes al Programa, a partir de las estimaciones de movilización de recursos y de los compromisos respecto a objetivos de desarrollo definidos en el marco de este documento. A continuación se presenta una tabla resumen con los recursos indicativos para el financiamiento del Plan de Acción del Programa País. Los fondos aportados desde PNUD corresponden a Recursos Ordinarios de la propia organización, sujetos a la disponibilidad de fondos. Por otra parte, y bajo liderazgo del Gobierno, PNUD realizará esfuerzos para movilizar aportes de otros donantes internacionales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, la Unión Europea o el fondo “Climate Clean Air Coalition” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros fondos concursables internos del propio PNUD a nivel mundial, sector privado y otras entidades ejecutoras, en función del interés de los donantes. Por otra parte, la tabla recoge el compromiso del Gobierno para el cumplimiento de los objetivos del Plan, sujeto a disponibilidad presupuestaria y distribuido entre los distintos efectos o resultados propuestos. Además, se prevé la movilización de recursos de otros donantes y contrapartes nacionales para la ejecución de actividades específicas dentro de este marco.

DISTRIBUCION DE RECURSOS POR RESULTADO PROGRAMÁTICO (USD)			
RESULTADOS	PNUD Y OTROS	COMPROMISO	TOTAL



	DONANTES INTERNACIONALES	DEL GOBIERNO EN EL PLAN DE ACCIÓN	
Resultado 1. Desarrollo inclusivo y sostenible	9,480,000	5,000,000	14,480,000
Resultado 2. Democracia inclusiva y participativa	9,303,000	2,300,000	11,400,000
Resultado 3. Gestión de riesgos y resiliencia	200,000	200,000	200,000
Resultado 4. Desarrollo Humano y Cooperación Sur Sur	500,000	2,500,000	3,000,000
TOTAL	19,483,000	10,000,000	29,483,000

7.2 Compromisos del PNUD. PNUD se compromete a aportar y movilizar al menos un monto de UDS 19,483,000 para la ejecución del Programa, a partir de recursos propios y de otros donantes, en función de disponibilidad e intereses de los donantes, además de otros fondos adicionales de otros aliados en el desarrollo para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa. PNUD garantizará la coherencia entre este Plan de Acción, los Documentos de Proyecto/Planes de Trabajo Anuales, la matriz de resultados del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) y el Plan Estratégico global del PNUD 2014-2017, incluyendo los informes de Seguimiento y Evaluación. Mediante revisiones anuales y presentación de informes sobre el progreso periódico de avance, se enfatizarán las responsabilidades entre el PNUD, el Gobierno y los Asociados en la Implementación.

7.3 Compromisos del Gobierno. El Gobierno se compromete a aportar la suma de US\$ 10,000,000, como contribución al logro de los objetivos del Plan de Acción y a apoyar los esfuerzos de la Oficina del PNUD en la movilización de recursos adicionales para la implementación del mismo, así como a continuar apoyando en la financiación los costos operativos de la Oficina del PNUD en Chile a partir del compromiso de los Estados miembros de contribuir en los costos de la Oficina local (GLOC)¹⁹.

7.4 Para operacionalizar este compromiso, el Gobierno y PNUD acordarán un mecanismo y una calendarización para la transferencia de los recursos con el fin de agilizar los procesos y garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos del Programa en tiempo y forma. Los avances y aprendizajes serán analizados en las reuniones de la Junta de Programa con el fin de ajustar objetivos, potenciar posibles sinergias y revisar procedimientos.

7.5 El Gobierno cumplirá sus compromisos de acuerdo con las cláusulas de los Acuerdos Básicos²⁰. El Gobierno aplicará consecuentemente, y según lo establecido en los Acuerdos Básicos, las disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los organismos de las Naciones Unidas²¹. Asimismo, y a efectos de la prestación de asistencia técnica, PNUD, como organismo subsidiario de Naciones Unidas y amparado por la mencionada Convención, estará sometido a las decisiones, reglas y regulaciones establecidas por su Junta Ejecutiva.

7.6 En este sentido, y en el marco de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la financiación de este Plan de Acción del Programa País 2015-2018 y los Documentos de Proyecto asociados al mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas:

¹⁹Ratificado por la Junta Ejecutiva de PNUD a través de la Decisión 2013/30.

²⁰ Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno de Chile y las Naciones Unidas, de 15 de enero de 1957 (D.Of. de 24 de octubre de 1960) y, Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre Asistencia Técnica del Fondo Especial, suscrito el 22 de enero de 1960 y enmendado el 18 de agosto de 1970 (D. Of. de 24 de octubre de 1960 y 17 de octubre de 1970). La Resolución 2029 de la Asamblea General, de 1965, fusionó el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial.

²¹ Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos de las Naciones Unidas, de 1946 (suscrita por Chile el 15 de octubre de 1948)



- El calendario de pagos y los detalles de la cuenta bancaria del PNUD.
- En el caso de no efectuarse en dólares estadounidenses, el monto del pago será determinado por el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del desembolso. Si se produjera una alteración en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas antes de que el PNUD hiciera uso completo del pago, el monto del balance de los fondos válido en ese momento será consecuentemente ajustado. Si, en dicho caso, se registrara una pérdida en el monto del balance de fondos, el PNUD informará al Gobierno con vistas a determinar si éste puede proporcionar financiación adicional. Si no fuera posible suministrar esta financiación adicional, el PNUD hará los esfuerzos posibles para reducir los alcances del proyecto, tratando de no alterar los objetivos centrales o los procesos de implementación, de manera que se le de continuidad a los proyectos. Si ello no fuera posible, el PNUD podrá suspender o poner fin a la asistencia al Plan de Acción del Programa País.
- El calendario citado más arriba tiene en cuenta el requisito de que los pagos deberán hacerse antes de la puesta en marcha de las actividades planificadas. Puede modificarse para que resulte coherente con el progreso en la ejecución del Plan de Acción del Programa País.
- El PNUD recibirá y administrará el pago de conformidad con el reglamento, reglas y directivas del PNUD. Periódicamente se entregarán informes financieros de los avances en la implementación de los proyectos al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para los recursos comprometidos por el Gobierno en el marco de este Plan de Acción del Programa País..
- Todas las cuentas financieras se expresarán en dólares estadounidenses.
- Si se esperan o verifican aumentos imprevistos en los gastos (ya sea por factores inflacionarios, fluctuaciones de los tipos de cambio o contingencias inesperadas), el PNUD presentará oportunamente al Gobierno un cálculo complementario que indique la financiación adicional necesaria. El Gobierno realizará todos los esfuerzos posibles para obtener los fondos adicionales requeridos.
- Si los pagos citados más arriba no se reciben de conformidad con el calendario establecido o si el Gobierno u otras fuentes no hacen efectiva la financiación adicional requerida conforme al párrafo anterior, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al Plan de Acción del Programa País, conforme al presente Acuerdo.
- Todo ingreso por intereses atribuible a la contribución se acreditará a la cuenta del PNUD (costos compartidos de programa) y se empleará conforme a lo establecido en los procedimientos del PNUD.
- De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos de Otros Recursos, la contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD, para dos categorías de costos diferentes relacionados con servicios de apoyo, a saber: (a) por costos indirectos incurridos por unidades de la Sede del PNUD y por la Oficina de Chile por concepto de apoyo general a la gestión (GMS); para cubrir estos costos, la contribución será cargada con una tasa no menor al 5% para fondos de Gobierno y 8% para fondos de terceras partes; (b) los costos directos incurridos por servicios de apoyo a la implementación prestados por el PNUD y/o Asociado en la Implementación, mientras estén inequívocamente vinculados al proyecto específico, se incluirán en el presupuesto del proyecto, dentro del marco de la línea presupuestaria pertinente y, en el caso de servicios transaccionales claramente identificables, se cargará al proyecto conforme a la tasa de servicios estándar.
- La propiedad del equipo, suministros y otros bienes financiados con la aportación se conferirá al PNUD. Los asuntos relacionados con la transferencia de propiedad por parte del PNUD serán realizados con arreglo a modalidades y condiciones mutuamente convenidas entre el Organismo de Coordinación y el PNUD.
- La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría establecidos por las regulaciones, reglas y directrices financieras definidas por la Junta Ejecutiva del PNUD, y en este sentido, las rendiciones financieras se realizarán a través de los informes de gastos (CDR, por sus siglas en inglés) e informes detallados de gastos (PTD, por



sus siglas en inglés) extraídos de su sistema financiero Atlas²². Estos informes serán entregados, según la periodicidad que se requiera, a los organismos públicos que aportan recursos para la ejecución de los proyectos, a efectos de la rendición de recursos públicos por parte de dichos organismos.

- Los organismos gubernamentales que comprometan fondos para la ejecución de proyectos deberán velar por la adecuada asignación de éstos en su presupuesto con el fin de responder a los requerimientos legales específicos a nivel nacional²³.

7.7 Se pondrán en práctica mecanismos para la planificación, supervisión y evaluación participativa del progreso del Plan de Acción del Programa País, que involucren a la sociedad civil y a otros asociados para el desarrollo. El Gobierno también se compromete a organizar revisiones periódicas del Plan, reuniones de planificación y estrategia conjunta y, cuando resulte apropiado, coordinación de grupos de asociados para el desarrollo sectorial y temáticos con el fin de facilitar la participación de donantes, de la sociedad civil, del sector privado y de organismos de Naciones Unidas. Además, el Gobierno facilitará visitas periódicas de supervisión al personal de Naciones Unidas y/o funcionarios designados con el propósito de supervisar, reunirse con beneficiarios, valorar el progreso y evaluar el impacto que produce el uso de los recursos del programa. El Gobierno pondrá oportunamente a disposición del PNUD toda información acerca de los cambios políticos y legislativos ocurridos durante la implementación del Plan de Acción del Programa País que puedan tener impacto en la cooperación.

7.8 Los Asociados en la Implementación emplearán un informe estándar de Autorización de Fondos y Certificado de Gastos (FACE), que refleje las líneas de actividad establecidas en el Plan Anual de Trabajo/Documento de Proyecto, para requerir la autorización de fondos o para obtener el acuerdo de que PNUD reembolsará o pagará directamente los gastos previstos. Los Asociados en la Implementación emplearán los informes FACE para informar acerca del uso del efectivo recibido. El Asociado en la Implementación identificará al/los oficial(es) designado(s) autorizados para proporcionar los detalles de la cuenta y requerirá y certificará el uso del efectivo. El Fondo y Certificado de Gastos será certificado por el/los oficial(es) designado(s) del Asociado en la Implementación.

7.9 Los fondos transferidos al PNUD o a los Asociados en la Implementación deberán emplearse con el sólo propósito de apoyar las actividades acordadas en los planes de trabajo anual/documentos de proyecto.

7.10 Los fondos recibidos por el PNUD y las ONG nacionales que actúen como Asociados en la Implementación serán usados acorde a lo establecido en las regulaciones, políticas y procedimientos nacionales compatibles con los estándares internacionales, asegurando que se cumpla con los requerimientos establecidos por el PNUD en materia de reporte y rendición en el uso de los fondos a través de una evaluación previa de capacidades, en particular para garantizar que los fondos que se utilizarán en las actividades acordadas en los Planes de Trabajo Anual/documentos de proyecto y para garantizar que los informes sobre la utilización total de los fondos recibidos se remitirán al PNUD dentro de un período que no exceda los seis meses desde la recepción de los mismos. En el caso de que alguna regulación, política o procedimiento nacional no sea compatible con dichos estándares se deberán aplicar las regulaciones, políticas y procedimientos de los organismos del Sistema de Naciones Unidas.

7.11 En el caso de que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las Organizaciones Intergubernamentales (OIG) internacionales que actúen como Asociados en la Implementación, los fondos recibidos se emplearán conforme a los estándares internacionales, en particular para garantizar que estos serán utilizados en las actividades acordadas en los Planes de Trabajo Anual/Documentos de Proyecto. En este caso, aplicarán las normas y regulaciones de PNUD para la rendición de fondos y reporte de actividades de acuerdo a los instrumentos definidos por PNUD para el establecimiento de alianzas con este tipo de organismos²⁴.

7.12 Las conclusiones de cada auditoría serán informadas al Asociado en la Implementación y al PNUD. Además cada Asociado en la Implementación:

²² En virtud del Dictamen 63780 de 19 de agosto de 2014 de Contraloría, PNUD no está sujeto a la Resolución 759 de la citada entidad.

²³ Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República.

²⁴ El instrumento "Acuerdo de subsidio de micro-capital" para la ejecución de actividades por ONG conlleva una serie de obligaciones de reporte y auditoría que aplican a este documento, que están en concordancia con las normas y regulaciones de PNUD, y que incluyen un informe de medio término y un informe final, y la entrega de los estados de cuentas auditados en relación a los fondos del Acuerdo.



- Recibirá y revisará el informe de auditoría emitido por los auditores, en base al Plan Anual de Auditoría para los proyectos de implementación nacional, y de acuerdo a las normas y regulaciones financieras de PNUD.
- Confeccionará una declaración oportuna aceptando o rechazando cualquiera de las recomendaciones de la auditoría al PNUD y a la entidad auditora.
- Realizará las acciones oportunas para abordar las recomendaciones de la auditoría aceptadas.
- Informará trimestralmente al PNUD sobre las acciones emprendidas para aplicar las recomendaciones aceptadas.

Parte 8. Otras disposiciones

8.1 Este Plan de Acción del Programa País entrará en vigor a partir de la fecha de firma de este documento. .y permanecerá vigente durante el periodo 2015-2018.

8.2 Este Plan de Acción del Programa País reemplaza todo Plan de Acción del Programa País suscrito con anterioridad entre el Gobierno de Chile y el PNUD y puede ser modificado con el consentimiento mutuo de ambas partes según las recomendaciones de la reunión de estrategia conjunta.

EN FE DE LO CUAL los signatarios debidamente autorizados han firmado este Plan de Acción del Programa de País en este día en Santiago de Chile.

Por el Gobierno del Chile:



Ministerio de Relaciones Exteriores



Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo::



ANEXO A: MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

PRIORIDAD NACIONAL: Cumplimiento ODM, reforma educativa, desarrollo de políticas de protección social universal, nueva agenda de género basada en los derechos, igualdad y autonomía de las mujeres, Plan Nacional para el Cambio Climático, política energética, promoción de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, educación ambiental				
EFFECTO 2 DEL MANU QUE INVOLUCRE A PNUD: Capacidades de organismos públicos para el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales con enfoque de derechos que reduzcan las desigualdades, fortalezcas				
EFFECTO 1 DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017: El crecimiento y el desarrollo son incluyentes y sostenibles, con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y modos de vida para los pobres y los excluidos				
INDICADORES (I), LINEA BASE (LB) Y META (M)	FUENTE DE DATOS (F), FRECUENCIA (O) Y RESPONSABILIDADES (R)	PRODUCTOS INDICATIVOS (INCLUIDOS INDICADORES, LINEA BASE Y META)	MARCO DE ASOCIADOS/ PRINCIPALES CONTRAPARTES	RECURSOS ESTIMADOS POR EFECTO (USD)
I: Porcentaje de población sobre la edad de jubilación que recibe pensión LB: 74.5 (OIT, 2012) M: No hay	OIT	Las instituciones del Estado a cargo de las políticas sociales mejoran sus capacidades para el diseño e implementación de programas y estrategias para reducir las desigualdades socioeconómicas y de género I: Número de políticas/programas/iniciativas que abordan las desigualdades socioeconómicas y de género en el acceso a servicios y beneficios sociales LB: 6 políticas (2000-2013) M: 2 nuevas políticas/programas/iniciativas	Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Trabajo Ministerio de Educación Gobiernos regionales y locales Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Energía Ministerio de Vivienda Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Congreso Comunidades Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones indígenas Universidades y centros de pensamiento Sector privado CEPAL FAO	Regulares 500,000 Otros 20,980,000
I: Porcentaje de desempleados que no recibe subsidio de desempleo LB: 70.1 (OIT, 2013) M: No hay	OIT	Los instrumentos de medición socioeconómica incorporan criterios y variables que mejoran la equidad y el acceso al sistema de protección social para mujeres, jóvenes y otras poblaciones vulnerables I: Número de reformas a los instrumentos de medición de la pobreza y la desigualdad LB: La medición de la pobreza se realiza solo en la dimensión de ingresos y la línea de pobreza corresponde a la establecida a fines de los años 80 M: 2 (introducción de medición multidimensional de la pobreza y actualización metodología de medición de la pobreza)		
I: Instrumentos de caracterización socioeconómica reformulados con enfoque de derechos LB: Instrumentos no incorporan el enfoque de derechos M: Sistema de asignación de beneficios sociales reformulado con enfoque de derechos	SNU	I: Porcentaje de programas que reforman sus políticas de selección de usuarios y beneficiarios LB: 80 programas sociales utilizan la Ficha de Protección Social como mecanismo de identificación de sus usuarios. M: 100% de los programas sociales utilizan nuevos instrumentos de selección en base a la información provista por registros administrativos de ingresos y activos.		
I: Matriz de indicadores de desigualdad LB: No existe M: Matriz consensuada y validada	SNU, Ministerio de Desarrollo Social	I: Número de informes con información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los ODM en población indígena. LB: 1 informe (2012) M: 3 informes (2012, 2015 y 2018 de acuerdo a la agenda post-2015)		
		Las instituciones competentes en materia de desarrollo local y urbano incrementan sus capacidades para disminuir las desigualdades territoriales y urbanas		



<p>I: Emisiones anuales de CO₂ LB: 92.100.000 Ton. (2010) M: Reducción 20% a 2020</p>	<p>SE4ALL</p>	<p>I: Número de normativas/iniciativas/acciones que incorporan medidas para reducir las brechas territoriales y la segregación urbana en el marco de la nueva Política de Desarrollo Urbano LB: Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2013 M: 5 normativas/iniciativas/acciones desarrolladas</p>
<p>I: Consumo de energías renovables respecto al consumo total de energía (julios) LB 257.232 vs. 954.252 M: No hay</p>	<p>SE4ALL</p>	<p>I: Número de alianzas público-privadas para el desarrollo local a través de planes de inversión territoriales con foco en empleo LB: Escasas experiencias de alianzas público-privadas. M: 2 alianzas público-privadas definidas.</p>
<p>I: Hectáreas de tierra gestionadas bajo un régimen de uso sostenible LB: 2.294.109 (2011, 2013) M: No hay</p>	<p>Organic World Net/Forest Stewardship Council/GEF</p>	<p>Las instituciones, a nivel nacional y subnacional, disponen de capacidades para definir e implementar políticas, planes y estrategias para conservar la biodiversidad, combatir los efectos del cambio climático y la desertificación I: Número de instrumentos/alianzas intersectoriales con financiación pública y/o privada para conservar la biodiversidad, combatir los efectos del cambio climático y la desertificación LB: 1 (2014) M: 3</p>
		<p>I: Número de planes, estrategias y políticas nacionales/regionales/ sectoriales para avanzar hacia una economía baja en carbono LB: 2 (Plan adaptación al Cambio Climático en biodiversidad, Estrategia Áreas Protegidas) 2014 M: 6</p>
		<p>I: Toneladas de HFCF importadas/consumidas anualmente LB: 100,27 (2010) M: 90,24 (2015)</p>
		<p>Las comunidades locales disponen de capacidades y medios para diseñar e implementar actividades productivas sostenibles para mejorar la conservación de la biodiversidad, combatir los efectos del cambio climático y la desertificación I: Número hombres y mujeres que fortalecen sus medios de vida a través de actividades productivas sostenibles, desagregado por etnia si aplica LB: 12228 hombres (2013), 11510 mujeres (2013) M: 13700 hombres, 13800 mujeres</p>
		<p>Las instituciones nacionales, regionales y locales mejoran sus capacidades para diseñar e implementar soluciones inclusivas y sostenibles para incrementar la eficiencia energética, el acceso a la energía de las comunidades rurales y la diversificación de la matriz energética I: Número de alianzas con financiación para la puesta en marcha de soluciones de eficiencia energética y energía sostenible a nivel nacional y local LB: 2 (2013) M: 4</p>
		<p>Las instituciones y organismos públicos han desarrollado capacidades para</p>



				prevenir y responder a la violencia sexual y de género I: Número de medidas implementadas en el marco del nuevo Plan de Acción Nacional LB: Plan de Acción Nacional de Violencia Intrafamiliar de periodicidad anual M: 3 medidas implementadas en el marco del nuevo Plan Nacional de Violencia de Género de medio plazo	
PRIORIDAD NACIONAL: Elaboración participativa de una nueva constitución, reformas políticas, fomento de la participación ciudadana, nueva relación para mejorar la calidad de vida de la población indígena rural y urbana, fortalecimiento del proceso de descentralización y atribuciones de gobiernos regionales y locales, promoción de la probidad y transparencia					
EFEECTO Nº 5 DEL MANUD QUE INVOLUCRE A PNUD: El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia					
EFEECTO 2 DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas, con sistemas más sólidos de gobernanza democrática					
INDICADORES (I), LINEA BASE (LB) Y META (M)	FUENTE DE DATOS (F), FRECUENCIA (F) Y RESPONSABILIDADES (R)	PRODUCTOS INDICATIVOS (INCLUYENDO INDICADORES, LINEA BASE Y META)	MARCO DE ASOCIADOS/ PRINCIPALES CONTRAPARTES	RECURSOS ESTIMADOS POR EFECTO (USD)	
I: Porcentaje de participación en las elecciones LB: 51.7 (2013) M: No hay	Servel	Las instituciones y organismos públicos han mejorado sus capacidades de gestión y han incorporado en sus procesos la transversalización del enfoque de género para mejorar la gobernabilidad democrática I: Número de instituciones/organismos que han puesto en marcha estrategias/medidas para incorporar el enfoque de género en su gestión LB: Actualmente Plan de Gestión, Consejo de Ministros para la Igualdad y Unidades de Género M: 4	Ministerio Secretaría General de la Presidencia Contraloría General de la República Consejo para la Transparencia Congreso Nacional INJUV SERNAM Gobiernos regionales y locales Comunidades Organizaciones de la sociedad civil Universidades y centros de pensamiento Organizaciones indígenas Ministerio de Salud Instituto Nacional de Estadística	Regulares 303,000	Otros 21,300,000
I: Proporción de mujeres en el Parlamento LB: 19/120 (2013) M: No hay	Cámara y Senado	Las instituciones del Estado y otras instituciones clave mejoran sus capacidades para desempeñar sus funciones en un marco de mayor participación y representación de la ciudadanía, con especial énfasis en mujeres, jóvenes y pueblos indígenas I: Número de iniciativas/reformas realizadas por instituciones del Estado y otras instituciones que incrementan los niveles de participación y representación, a nivel nacional o regional, y por tipo de destinatario si aplica LB: 4 (Reformas 2011-2014) M: 7			
I: Ley de promoción de la representación política de las mujeres LB: No existe (2014) M: Ley aprobada (2018)	Congreso				
I: Espacios de diálogo convocados por el Sistema de Naciones Unidas para la discusión de reformas LB: No hay M: Al menos 1 espacio convocado y acompañado por NNUU	Sistema Naciones Unidas	Mujeres y jóvenes cuentan con conocimientos y habilidades para el ejercicio del liderazgo y la participación social y política I: Porcentaje de mujeres candidatas en elecciones a la Cámara o locales			
I: Institucionalidad para Pueblos Indígenas dentro	Congreso				



del Ejecutivo con representación indígena creada en consulta con los PI

Línea de Base: Débil institucionalidad

Meta: Proyecto de ley para crear un Ministerio de Pueblos originarios

Indicador 4: Creación del Ministerio de la Mujer.

Línea Base: Propuesta de ley

Meta: Ministerio de la Mujer creado y operativo

Congreso

LB: Entre 1989 y 2013: 15% decandadas a la Cámara

M: Entre un 40 y un 60% de candidatos de un mismo sexo (propuesta reforma electoral binominal)

I: Porcentaje de parlamentarios en la Cámara de Diputados de entre 21 y 35 años

LB: 15% en Cámara de Diputados (2014)

M: No hay

Número de jóvenes, hombres y mujeres, que participan en instancias de formación y liderazgo promovidas desde las instituciones públicas

LB: 1009 hombres, 1185 mujeres (2013)

M: 4000 hombres, 4700 mujeres (2018)

Las instituciones nacionales/sectoriales han desarrollado e implementado políticas y mecanismos para el acceso a la información y medidas anticorrupción de acuerdo a las convenciones y estándares internacionales

I: Número de propuestas adoptadas para prevenir los riesgos de la corrupción a nivel sectorial diseñadas en implementación

LB: 0 (2013)

M: 1 (2018)

I: Porcentaje de conocimiento de la ciudadanía respecto del derecho de acceso a la información (incluida en la Ley de Transparencia N°20.285)

LB: 19,7% (Encuesta 2013)

M: No hay

Las instituciones con competencias en gestión ambiental disponen de las capacidades, políticas e instrumentos para responder de manera coordinada a los retos de conservación, acceso y uso de los recursos naturales, tanto a nivel nacional como regional y local

I: Número de iniciativas/reformas que contribuyen a consolidar el marco de gestión ambiental de los recursos ambientales, la biodiversidad y los ecosistemas

LB: 0 (2014)

M: 3 (2018)

I: Número de mecanismos/alianzas con financiación para mejorar el marco de planificación para la conservación y uso sostenible de los recursos, naturales, la biodiversidad y los ecosistemas

LB: 0

M: 3

Las instituciones regionales y locales desarrollan capacidades de planificación, implementación y evaluación de políticas públicas para asumir competencias en los procesos de descentralización y mejorar las brechas de desigualdad persistentes

I: Número de gobiernos regionales/municipios que participan en programas piloto de descentralización

LB: Comisión Presidencial de descentralización creada en 2014

M: 2 gobiernos regionales y/o locales diseñan e implementan políticas basadas en el proceso de descentralización



PRIORIDAD NACIONAL: Gestión integral del riesgo de desastres y climático					
EFECTO N° 9 DEL MANUD QUE INVOLUCRE A PNUD: Las instituciones y la sociedad civil disponen de la capacidad para gestionar el riesgo de desastres de manera integral					
EFECTO 5 DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017: Capacidad de los países para reducir las probabilidades de conflicto y reducir el riesgo de desastres naturales, incluidos los derivados del cambio climático					
INDICADORES (I), LINEA BASE (LB) Y META (M)	FUENTE DE DATOS (F), FRECUENCIA (F) Y RESPONSABILIDADES (R)	PRODUCTOS INDICATIVOS (INCLUYENDO INDICADORES, LINEA BASE Y META)	MARCO DE ASOCIADOS/ PRINCIPALES CONTRAPARTES	RECURSOS ESTIMADOS POR EFECTO (USD)	
I: Mortalidad por peligros naturales para hombres y mujeres LB: 577 (evento 2010) M: Reducir	Plan de reconstrucción (Gobierno)	Las instituciones con competencias en gestión de riesgos definen marcos normativos, políticas e instrumentos para mejorar la implementación de medidas de gestión del riesgo de desastres y/o climático a nivel nacional, regional y local I: Porcentaje de municipios que realizan procesos de planificación con enfoque de gestión del riesgo de desastres y/o climático LB: 1 (2013) M: 25% I: Número de planes y estrategias que definen responsabilidades y contienen mecanismos de coordinación y participación de actores a nivel nacional, regional y/o local en gestión del riesgo LB: 3 (2 regionales, 1 local, 2013) M: 10 planes y estrategias I: Número de planes y estrategias que disponen de presupuesto a nivel nacional, regional y/o local para gestión del riesgo LB: 1 (local, 2013) M: 10 planes y estrategias disponen de presupuesto formal para Gestión del Riesgo.	Oficina Nacional de Emergencias Subsecretaría de Desarrollo Regional Gobiernos regionales y locales Comunidades Organizaciones de la Sociedad Civil universidades y centros de pensamiento	Regulares 200,000	
I: Pérdidas económicas por peligros naturales como proporción del PIB LB: 18% (evento 2010) M: Reducir	Plan de reconstrucción (Gobierno)		Otros 600,000		
Indicador 4: N° de redes humanitarias regionales funcionando Línea de Base: Plataforma nacional Meta: Plataforma nacional y mecanismo de coordinación	SNU				
PRIORIDAD NACIONAL: Sistema integrado de política exterior					
EFECTO N° 10 DEL MANUD QUE INVOLUCRE A PNUD: El Estado chileno fortalecido en su capacidad de proveer cooperación sur-sur a través del mejoramiento de la institucionalidad y procedimientos involucrados					
EFECTO 7 DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017: Debates y medidas sobre el desarrollo en todos los niveles con prioridad en la pobreza, la desigualdad y la exclusión de manera consecuente con nuestros compromisos					
INDICADORES (I), LINEA BASE (LB) Y META (M)	FUENTE DE DATOS (F), FRECUENCIA (F) Y RESPONSABILIDADES (R)	PRODUCTOS INDICATIVOS (INCLUYENDO INDICADORES, LINEA BASE Y META)	MARCO DE ASOCIADOS/ PRINCIPALES CONTRAPARTES	RECURSOS ESTIMADOS POR EFECTO (USD)	
Indicador 1: Estrategia	AGCI	Las instituciones y otros socios que realizan cooperación sur-sur disponen de		Regulares	



<p>Nacional de Cooperación Sur Sur desarrollada.</p> <p>Línea de Base: Documento de identificación de áreas estratégicas e instrumentos de Cooperación Sur-Sur</p> <p>Meta: Estrategia elaborada y puesta en operación</p>	<p>AGCI</p>	<p>marcos, capacidades e instrumentos para potenciar la cooperación</p> <p>I: Número de alianzas de CSS y triangular establecidas a nivel nacional LB: 5 (2013) M: 11 (2018)</p> <p>I: Número de alianzas de CSS y triangular que entregan beneficios medibles y sostenibles a los participantes LB: 5 (2013) M: 11 (2018)</p> <p>I: Número de estrategias/instrumentos/mecanismos de coordinación/plataformas/productos de conocimiento generados para promover el intercambio de experiencias exitosas para el desarrollo LB: 5 (2014) M: 8 (2018)</p> <p>El enfoque de Desarrollo Humano provee marcos, conocimiento y propuestas para avanzar en el desarrollo humano sostenible en todos los niveles de la sociedad chilena</p> <p>I: Número de normas, políticas, estrategias o instituciones que hacen referencia/incorporan contenidos/propuestas de los informes de DH LB: 1 (2011) M: 3 (2018)</p> <p>I: Número de regiones/comunas que disponen de IDH regional/comunal LB: 0 (2014) M: 15 regiones y 345 comunas (2018)</p>	<p>500,000</p> <p>Otros 8,000,000</p>
--	-------------	---	---



ANEXO B. PLAN DE EVALUACIÓN CON DETALLE DE TODOS LOS COSTOS

Efecto del MANUD (o equivalente)	Efecto del Plan Estratégico del PNUD	Título de la evaluación	Asociados (evaluación conjunta)	Evaluación encargada por (si no es el PNUD)	Tipo de evaluación	Fecha de finalización de la evaluación planificada	Costo estimado	Fuente provisional de financiación
Capacidades de organismos públicos para el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales con enfoque de derechos que reduzcan las desigualdades, fortalecidas	Efecto 1: El crecimiento y el desarrollo incluyentes y sostenibles, con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y modos de vida para los pobres y los excluidos	Evaluación del resultado de "Desarrollo inclusivo y sostenible"	Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio Relaciones Exteriores	PNUD	Efecto	Diciembre 2017	20,000	Presupuesto para S&E de las áreas
El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia	Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas, con sistemas más sólidos de gobernanza democrática	Evaluación del resultado "Democracia inclusiva y participativa"	Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio Relaciones Exteriores	PNUD	Efecto	Diciembre 2017	20,000	Presupuesto para S&E de las áreas
El Estado chileno fortalecido en su capacidad de proveer cooperación sur-sur a través del mejoramiento de la institucionalidad y procedimientos involucrados	Debates y medidas sobre el desarrollo en todos los niveles con prioridad en la pobreza, la desigualdad y la exclusión de manera consecuente con nuestros compromisos	Evaluación del proyecto Fondo contra el Hambre y la Pobreza	Agencia Chilena de Cooperación Internacional	PNUD	Proyecto	Septiembre 2015	15,000	Proyecto
El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia	Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas, con sistemas más sólidos de gobernanza democrática	Evaluación proyecto GEF SNAP Sistema Nacional de Areas Protegidas		GEF	Proyecto	Diciembre 2016	25,000	Proyecto



Capacidades de organismos públicos para el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales con enfoque de derechos que reduzcan las desigualdades, fortalezcan	Efecto 1: El crecimiento y el desarrollo incluyentes y sostenibles, con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y modos de vida para los pobres y los excluidos	Evaluación del proyecto GEF de Colectores Solares		GEF	Proyecto	Marzo 2015	25,000	Proyecto
El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia	Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas, con sistemas más sólidos de gobernanza democrática	Evaluación del proyecto Implementación de la nueva Política de Desarrollo Urbano Sostenible		PNUD	Proyecto	Diciembre 2018	20,000	Proyecto
El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia	Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas, con sistemas más sólidos de gobernanza democrática	Evaluación del proyecto Auditoría de la Democracia	Consorcio de centros de pensamiento	PNUD	Proyecto	Junio 2015	15,000	Proyecto
El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia	Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas, con sistemas más sólidos de gobernanza democrática	Evaluación proyecto GEF PDLA Apoyando a la sociedad civil e iniciativas comunitarias para generar beneficios ambientales mundiales utilizando subsidios y micropréstamos en la Ecoregión Mediterránea de Chile		GEF	Proyecto	Diciembre 2018	25,000	Proyecto

El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia	Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas, con sistemas más sólidos de gobernanza democrática	Evaluación Proyecto: Programa de Lucha contra la Desertificación		UE	Proyecto	Diciembre 2016	20,000	Proyecto
El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia	Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas, con sistemas más sólidos de gobernanza democrática	Evaluación Proyecto: GEF Estrategia Nacional de Biodiversidad		GEF	Proyecto	Diciembre 2015	20,000	Proyecto
El Estado habrá avanzado en la definición e implementación de reformas políticas orientadas a mejorar la participación y representación de ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la democracia	Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, estado de derecho y rendición de cuentas, con sistemas más sólidos de gobernanza democrática	Evaluación Proyecto: GEF Especies Exóticas Juan Fernández		GEF	Proyecto	Diciembre 2017	20,000	Proyecto
Todos los efectos del UNDAF		Evaluación UNDAF	Sistema de Naciones Unidas en Chile	OCR	UNDAF	Diciembre 2017	20,000	OCR



